

Crisis post electoral en Honduras. *El colapso de la institucionalidad y el dramático reclamo de derechos ciudadanos.*

ANA ORTEGA
2018

Resumen

Las irregularidades con visos de fraude, ocurridas en el reciente proceso electoral del 26 de noviembre, 2017, han sido el detonante de una crisis política que tiene profundas raíces históricas y estructurales, a las cuales se suman el colapso de la institucionalidad, la crisis del sistema político y el fracaso del proyecto económico que se viene implementando con mayor rigurosidad desde principios de la década de los 90 y que se profundiza después del golpe de Estado del 2009.

En ese contexto, buena parte del pueblo hondureño, llevado al límite de la sobrevivencia, cansado de esperar acceder a derechos políticos cuya vigencia es condición de posibilidad para la democracia; ha decidido reclamar en las calles, lo que considera negado por la colapsada institucionalidad del Estado hondureño.

La reacción de buena parte de la población que argumenta fraude electoral, ha sorprendido, entre otras cosas, por el nivel de determinación y persistencia de las protestas a lo largo de todo el país a pesar de la represión desplegada por el actual gobierno para contenerlas.

Auscultar las raíces de la actual crisis, los procesos, los actores relevantes y los posibles escenarios que se configuran a partir de las expresiones e implicaciones actuales, son algunos de los objetivos de este documento.



Antecedentes

Las irregularidades con visos de fraude, de las recientes elecciones del 26 de noviembre, 2017, ha sido el detonante de una crisis política que tiene profundas raíces históricas y estructurales, a esta causa se suman situaciones recientes que finalmente han dejado expuesto el colapso de la institucionalidad, la crisis del sistema político y el fracaso del proyecto económico que se viene implementando con mayor rigurosidad desde principios de la década de los 90 y se profundiza después del golpe de Estado del 2009.

En este contexto, buena parte del pueblo hondureño, llevado al límite de la sobrevivencia, cansado de esperar acceder a derechos políticos, cuya vigencia es condición de posibilidad para la democracia, aun en su dimensión formal; ha decidido reclamar en las calles, lo que considera negado por la colapsada institucionalidad del Estado hondureño.

Efectivamente, una mirada retrospectiva del Estado hondureño, nos muestra su frustrada consolidación, evidenciando que la incipiente institucionalidad hondureña se quedó estancada en un régimen patrimonial; primero bajo la forma de Estado botín y ahora, en la forma de un Estado capturado, en el que sus instituciones sirven casi de manera exclusiva al grupo de poder que lo controla.

En cualquier caso, se trata de un persistente saqueo y apropiación de bienes públicos e instituciones puestas al servicio de intereses particulares del grupo en el poder, quienes se otorgan privilegios en detrimento de los derechos del resto de la población. El resultado es una situación en la que de manera sistemática se violentan no solo derechos económicos y sociales que constituyen una histórica deuda con más de la mitad de la población, ahora buena parte de la población percibe que sus derechos han sido violentados.

Es evidente que la institucionalidad del Estado hondureño, lejos de viabilizar procesos de construcción de ciudadanía, se ha utilizado para

mantener el control y sometimiento de la población, a través de la reproducción de una cultura autoritaria o de asistencialismo. El resultado es una matriz de relacionamiento entre Estado y Sociedad marcada por represión y clientelismo político.

Se trata de un Estado “fuerte” para hacer prevalecer los intereses particulares del grupo que ostenta el poder, pero peligrosamente débil para viabilizar un mínimo contrato social y garantizar derechos fundamentales a su población.

Democracia “Electoral” truncada o Dictadura “Electoral”.

En una sociedad y un Estado con esas características se ha configurado lo que Torres Rivas (2009) ha denominado “*democracias malas*”: *mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad*¹. En síntesis, esta es la democracia que la sociedad hondureña conoce, no obstante, buena parte de esa sociedad se esfuerza por profundizarla.

La crisis actual, muestra que la incipiente institucionalidad creada para viabilizar la frágil democracia electoral iniciada en 1982, de manera paradójica, ha ido colapsando a medida transcurre su implementación; es evidente que en lugar de fortalecerse se ha ido debilitando de manera progresiva.

El golpe de Estado del 2009 marcó un punto de inflexión en ese colapso, en tanto fallaron hasta los procedimientos; es decir, sin haber alcanzado legitimidad en los resultados, la misma élite política atentó contra la débil institucionalidad que apenas iniciaba. Así, la larga e inacabada etapa de transición

¹ Edelberto Torres Rivas. Las democracias malas de Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica, revista Nueva Sociedad No 226, marzo-abril de 2010.



de gobiernos de facto hacia una democracia electoral ha sido truncada y los escasos avances en el marco legal e institucional anulados. Como resultado, se profundizó y aceleró la crisis del sistema político, evidenciado en el reciente proceso electoral.

Dicha crisis se venía gestando casi desde el principio de la llamada transición; elementos claves del sistema como el régimen electoral y sus instituciones el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de las reformas del 2004, no pudieron consolidarse como instituciones independientes, autónomas y confiables. Del anterior control bipartidista, se pasó al control, de manera contundente y abierta del partido en el poder. El colapso del TSE durante las recientes elecciones, constituye una nítida expresión de dicho control, de igual manera, ese control se ha extendido hacia otras instituciones del Estado.

Efectivamente, el control del actual titular del Poder Ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, se fue dando de manera progresiva desde que ostentaba el cargo de Presidente del poder Legislativo. Fue visible en el adelanto de la elección de magistrados al RNP y TSE², la posterior elección de la Corte Suprema de Justicia³ y la Fiscalía General de la República⁴. Instituciones claves para asegurar el proyecto político del actual presidente y asegurar la impunidad que se completó con el cambio en la Constitución, dicho cambio se concretó a través de un cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia que “legalizó” la reelección.

A la par de estos cambios en el marco institucional y legal que incluyeron un acelerado proceso de militarización de la seguridad; el actual presidente también se ha caracterizado por implementar medidas tendientes a garantizarle una mayor concentración de poder, de discrecionalidad y de secretividad.

Sobresalen en esa línea, la cuestionada Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, conocida como Ley de secretos oficiales, que contraviene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en el 2006 después de más de tres

años de esfuerzos de organizaciones ciudadanas.

Más grave aún, es la creación de nuevas instituciones como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por los titulares de los tres poderes del Estado, el Fiscal General y los Secretarios de Seguridad y de Defensa, presidido por el Presidente de la República, quien dispone de amplios márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones y en el manejo de un amplio presupuesto. Este Consejo constituye una especie de institucionalidad paralela, por encima del resto de la institucionalidad del Estado, para efectos prácticos así se ha configurado una forma de supragobierno.

A esta breve descripción de expresiones de la crisis del sistema político a nivel interno, se agregan expresiones más visibles de la crisis global de la política; expresiones como el agotamiento del principio de representación, la desconfianza hacia la élite política, el descontento y alejamiento de la política. Estos elementos se unen y refuerzan la crisis interna del país, agravada con los dramáticos impactos humanos del modelo económico dominante.

² Con 5 meses de anticipación eligen a nuevos magistrados del TSE: <http://www.elheraldo.hn/alfrente/566424-209/eligen-magistrados-del-tse-y-directores-del-rnp>

³ Tras 6 intentos y 3 semanas de cabildeo, se elige nueva corte (2016-2023):

<http://www.elheraldo.hn/pais/928826-466/honduras-congreso-nacional-juramenta-nueva-corte-suprema-de-justicia>, edición 11-02-2016.

⁴ Eligen nuevo Fiscal General en un cuestionado proceso porque no lo correspondía a este congreso: <http://www.elheraldo.hn/alfrente/566298-209/congreso-de-honduras-elige-en-polemica-sesion-a-fiscal-general>, edición, 1-9-2013

Expresiones del fracaso del modelo económico

En Honduras, el modelo económico global se basa, fundamentalmente en un exacerbado extractivismo, acompañado de corrupción e impunidad. Esta realidad, ha sido el detonante, sobre todo después del golpe de Estado de 2009, de un extendido descontento expresado en las calles y de conflictos más complejos en los territorios. Sobre todo, en territorios de poblaciones originarias y comunidades campesinas, históricamente en lucha por la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos o bienes comunes de la naturaleza necesarios para la sobrevivencia.

El modelo económico Neoliberal, con características de una extendida privatización, desregulación y liberalización de la economía, se aceleró desde 1990, pero tomó más fuerza después del golpe de Estado del 2009. Regiones como el Bajo Aguán, la Costa Atlántica, donde se concentra la mayor cantidad de población Garífuna, y en el occidente del país, donde se concentra la población indígena, dan cuenta de la conflictividad que genera el modelo.

A la tradicional concesión de territorios para explotación minera, bananera, forestal y monocultivo (principalmente de palma africana, caña de azúcar, frutas y verduras de exportación), se agrega en los últimos años, la promoción del recurso turístico, la concesión de recursos para generación de energías renovables y recientemente la creación de zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE).

La Ley de creación de las ZEDE contempla la concesión de territorio y la transferencia de funciones clásicas del Estado, como la gestión de la seguridad interna, la educación o la salud, entre otras atribuciones propias de un Estado. Lo cual atenta contra la soberanía y la vigencia e integridad del Estado hondureño, razones expuestas por las organizaciones ciudadanas, de pueblos originarios y pobladores en general, que han rechazado dicha Ley.

La profundización de esta economía extractiva, unida a reformas fiscales, leyes de incentivos a la inversión, privatización de bienes públicos, disminución de inversión social en áreas claves para el desarrollo humano como salud y educación, a la par de la crisis del empleo y de la seguridad ciudadana, han incrementado la insatisfacción de la población que experimenta un notable deterioro de su calidad de vida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a junio de 2017 el 64.3% de los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, en el área rural el porcentaje alcanza el 69.3%. La misma encuesta muestra que en los últimos 2 años se ha profundizado la desigualdad social (medida por el coeficiente de Ginni, que pasó de 0.506 en el 2015 a 0.525 en el 2017). Por su parte, los indicadores del mercado laboral, a esa misma fecha, muestran que 62.7% de la Población Económicamente Activa tiene problemas de empleo (tasa de desempleo abierto 6.7%, tasa de subempleo visible 11.8% y tasa de subempleo invisible 44.2%)⁵.

Según el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), del 2016 al 2017, la pobreza se incrementó del 65.7% al 68.8%, significa un incremento de 379, 203 personas, solo en el último año.

Frente a esta realidad y en la búsqueda de estrategias de sobrevivencia miles de personas incluyendo mujeres, niños y niñas, se han visto obligados a salir del país a pesar de las dificultades y peligros de la ruta migratoria, por lo que más que migración voluntaria, parecería más bien una forma de expulsión de miles de personas, quienes se ven obligados por razones de sobrevivencia a salir del país.

⁵ <http://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/encuesta%20de%20hogares/EPHPM%202017/002%20Resumen%20Ejecutivo%202017.pdf>



Actores y Procesos Relevantes

Hasta el año 2009, Honduras se caracterizó por tener un sistema bipartidista de partidos políticos, de fuerte “institucionalidad” y arraigo en la población, dicho sistema generó y reprodujo una cultura política clientelar, que limita la ciudadanía a su mínima expresión de votante cada cuatro años. Así se mantuvieron en el poder por más de un siglo, a pesar de su mal desempeño, incapacidad y ausencia de voluntad política para impulsar un proyecto de país incluyente y próspero, excepto para quienes han formado parte de dicha élite, distribuida en ambos partidos.

Estos partidos se han vinculado con la ciudadanía a través de redes clientelares y con el Estado, a través de la corrupción en sus más diversas expresiones. El reciente escándalo de corrupción descubierto en el sistema de salud pública, refleja lo arraigado y sistemático de esta práctica, acompañada de la impunidad que la ha promovido y blindado de manera sistemática y efectiva. Dicha corrupción, ahora muestra mayores niveles de sofisticación, de captura de las instituciones y de saqueo de bienes públicos.

La élite política, que durante la crisis que culminó con el golpe de Estado del 2009, dejó al descubierto el entramado de vínculos e intereses con sectores empresariales, religiosos y comunicacionales, respaldados por las fuerzas armadas y la injerencia directa de Estados Unidos, quienes atentaron contra la incipiente institucionalidad, de manera abierta y violenta. Así la delgada frontera entre la legalidad y la ilegalidad desapareció sin ninguna consecuencia.

Ese mismo frente, diverso pero con intereses comunes, se ha vuelto a mostrar durante la presente crisis política, dejando claro que no están dispuestos a ceder en lo más mínimo y que defenderán sus privilegios por encima de la Ley, e incluso, atentando contra la sobrevivencia y la propia vida de las personas que se opongan, utilizando para ello las instituciones

y la violencia estatal.

En clave geopolítica, y de manera más estructural, no se puede obviar el papel de Estados Unidos, histórico actor de primera línea en las diferentes etapas de la vida republicana de la región, con especial énfasis en Honduras. Un breve recorrido a través de las últimas décadas permite constatar una permanente injerencia y uso del territorio hondureño, incluso como punta de lanza para intervenir militarmente en los países vecinos. Actualmente Honduras es el país con mayor intervención militar de Estados Unidos en Centro América, ahora con el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Con relación a la actual crisis política, tomando como punto de partida el golpe del 2009, la intervención norteamericana fue decisiva. De la misma manera, legitimaron las pasadas elecciones del 2009 y del 2013, llegando incluso a usurpar abiertamente las funciones del TSE. La injerencia se mantiene, incluso sin embajador, como ha pasado en estas últimas elecciones en las que la encargada de negocios de la embajada se trasladaba a menudo a la sede del TSE para respaldar declaraciones y hasta los resultados oficiales anunciados por el Presidente del TSE. Todo lo anterior evidencia la supremacía de los intereses de Estados Unidos, tanto de tipo económico como geoestratégicos en detrimento de la débil democracia hondureña.

Otro actor relevante en esta crisis y ante la magnitud de las irregularidades presentadas antes, durante y después del proceso electoral, son las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. Sobre todo la primera, que incluso llegó a calificar de “baja calidad” el proceso electoral⁶.

⁶ OEA divulga informe final de las elecciones en Honduras: http://www.laprensa.hn/honduras/elecciones2017/1138569-410/oea-informe_final-elecciones_honduras-tse, edición 27-12-2017.



Diferente de ocasiones anteriores, en ésta, ambas misiones se negaron a respaldar abiertamente el resultado oficial, por lo menos al principio. Unas semanas después, primero la misión de la UE y posteriormente también la OEA, aunque de manera ambigua, han respaldado el resultado oficial. No obstante, su postura inicial, fue un importante detonante de la crisis electoral.

De lado de la población, si bien, hemos afirmado que la cultura autoritaria y la captura de la institucionalidad ha obstaculizado la construcción de ciudadanía; no obstante; la lucha por la sobrevivencia, la acumulación de necesidades y demandas insatisfechas, los aprendizajes internos de los últimos años y el efecto demostrativo de los recientes procesos reivindicativos de la región, han motivado una creciente movilización ciudadana y procesos organizativos, sobre todo a partir del golpe de Estado del 2009. Dicha acumulación de experiencias y sujetos políticos colectivos ha sido clave para impulsar la movilización contra lo que consideran fraude electoral y también contra lo que consideran un “ilegal” proyecto reeleccionista, que las instituciones intentan legalizar.

Las manifestaciones de rechazo se mantienen a lo largo de todo el país a pesar de la represión estatal. Según cifras de organizaciones de derechos humanos en el periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre, 2017, suman 30 personas ejecutadas, 1,085 detenidas, 232 heridas y una desaparecida, en el marco de 126 manifestaciones reprimidas violentamente de un total de 1,055 registradas en todo el país.⁷

El rechazo a la reelección y el fraude electoral por parte de miles de personas que se sienten burlados en su decisión soberana, converge con la lucha permanente de movimientos sociales y populares como el movimiento campesino, indígena, ambientalista y de pobladores en resistencia, que rechazan el modelo económico extractivista porque lo experimentan como desposesión y por tanto inherentemente violento, en tanto, se sostiene en el despojo no solo de bienes comunes de la naturaleza sino también de bienes sociales y culturales.

A estas muestras de descontento se unen otros actores y procesos recientes como el llamado movimiento de las antorchas, impulsado especialmente por la juventud de distintos sectores indignados por la corrupción; el movimiento estudiantil universitario, que recién ha librado una importante lucha en la Universidad Nacional; las organizaciones de mujeres y feministas que desde el golpe del 2009 mantienen una importante lucha reivindicativa y en contra de la violencia de género; y recientemente una coalición de reconocidos liderazgos opuestos al continuismo del actual presidente y del proyecto económico y político que representa.

Desde el gobierno, la estrategia para neutralizar estas resistencias pasa por la militarización de territorios y la creación de un nuevo marco legal, también ampliamente cuestionado, porque que a la vez que favorece la inversión privada extractiva, la corrupción y la impunidad, criminaliza la protesta social. Esto se puede constatar en el nuevo código penal, actualmente en proceso de aprobación, a la par de otras leyes y medidas que promueven e impulsan el modelo económico, a pesar de la abundante evidencia que muestra su fracaso en generar empleo, ingreso y desarrollo humano.

Posibles escenarios de la actual crisis post electoral

La actual crisis se ha caracterizado principalmente por la pérdida de legitimidad institucional y la incertidumbre, en ese contexto, es difícil prever hacia

⁷ Informe 2 del COFADEH: Violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas anti fraude en Honduras:file:///C:/Users/OHCHR/Downloads/COFADEH.%20Informe%20violaciones%20a%20DH%20en%20contexto%20protesas%20anti%20fraude%20en%20Honduras%20No.2(1).pdf



donde se orienta y como de decantará el conflicto. La protesta ha arreciado en los últimos días, de cara a la toma de posesión (27 de enero, 2018). A la vez se observa la consolidación del presidente reelecto y de su partido, que ya se aseguró el control del Congreso Nacional a través de la reelección del anterior presidente (Mauricio Oliva), del mismo partido y leal al presidente Juan Orlando Hernández.

El nuevo Congreso, haciendo caso omiso de la crisis y el descontento de buena parte de la población, ya comenzó a legislar a favor de la impunidad y la corrupción, como lo evidencia las disposiciones presupuestarias introducidas el mismo día de su toma de posesión, que ha obligado a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a rechazarlas públicamente⁸.

En ese contexto, vale la pena preguntarse qué escenarios se configuran en medio de una crisis irresuelta y de un llamado oficial al diálogo que todavía no convence a la oposición, y que aún con el nombramiento oficial de la institucionalidad interna, el reconocimiento de los Estados Unidos y de la cooperación internacional no logrará superar la ingobernabilidad, a pesar de las medidas de fuerza utilizada y el control de los poderes del Estado, sectores empresariales, religiosos, medios de comunicación corporativos y otros poderes fácticos importantes para mantenerse en el poder.

Frente a todo lo planteado ¿Qué escenarios se podrían configurar en el corto y mediano plazo?: se pueden inferir al menos tres:

1. Primer escenario: El actual presidente Juan Orlando Hernández podría tomar posesión contando con la declaración oficial del TSE y el reconocimiento del Gobierno de EE.UU, pero con el rechazo interno de buena parte de la población que se manifiesta sistemáticamente a través de tomas, movilizaciones y otras formas de protesta.

En este primer escenario, el presidente reelecto podría intentar controlar las protestas en su contra utilizando las fuerzas represivas del Estado, tal cual lo ha hecho hasta la fecha pero con limitado éxito e incrementando el elevado y dramático costo humano, la polarización social y las violaciones a derechos humanos. Violaciones evidentes que podrían profundizar la actual crisis de gobernabilidad e incluso, impedir al presidente reelecto concluir su segundo período presidencial.

2. En un segundo escenario, el actual presidente reelecto podría tomar posesión contando con acuerdos mínimos con la oposición y consensos básicos con algunos sectores claves para gobernar. En base a estos acuerdos y consensos se lograría desmovilizar las protestas y generar un precario equilibrio que le permita gobernar y continuar con el proyecto económico que desde el golpe de Estado se viene implementando en el país. Pero para lograrlo tendría que ceder en algunos aspectos formales, como la anhelada reforma política que su partido se negó a impulsar previo a las elecciones, algunas reformas económicas y otras reformas en el marco legal e institucional orientadas hacia el fortalecimiento de una “aparente” lucha contra la corrupción y la impunidad, entre otras.

En todo caso, no se trataría de reformas estructurales, sino más bien de una suerte de transformismo que introduce cambios de forma para que en el fondo todo siga igual. Así, podría avanzar el proyecto económico y político que representa, pero de manera menos agresiva o por lo menos aparentando más tolerancia hacia la oposición. Tanto en éste como en el primer escenario se habrá perdido la oportunidad de

⁸ Ver detalle en; <https://comayagua.net/corte-suprema-suspende-caso-de-red-de-diputados/>



aprovechar la actual crisis para impulsar los cambios estructurales que la sociedad hondureña demanda.

3. En el tercer escenario; la presión popular y acciones estratégicas de movimientos sociales, ciudadanos opuestos a la reelección y al fraude electoral, junto a la Alianza de Oposición contra la Dictadura, logran condicionar al presidente reelecto para que de manera inmediata, genere las condiciones “democráticas” para un diálogo incluyente, transparente y efectivo. La Alianza de Oposición contra la Dictadura es la suma de partidos y fuerzas políticas organizadas frente al proceso electoral general 2017, con un candidato presidencial único, Salvador Nasralla. Está conformada por el Partido Libertad y Refundación, que surge del movimiento contra el golpe de Estado de 2009, aliado con el Partido Innovación y Unidad y ex miembros del Partido Anticorrupción, cuyo candidato se supone ganó las elecciones.

El diálogo bajo esas condiciones permitiría encontrar salidas consensuadas a la crisis, una especie de solución en el corto plazo, pero sin descartar alternativas a mediano plazo como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Este podría ser el escenario más favorable para generar las condiciones necesarias para impulsar las transformaciones que la sociedad hondureña y los sectores más progresistas vienen demandando de manera más visible desde el Golpe de Estado del 2009.

Conclusiones y Recomendaciones

El colapso de la institucionalidad democrática hondureña tuvo su expresión más dramática durante el golpe de Estado del 2009, sin siquiera haberse consolidado. Desafortunadamente, el grupo de poder que promovió y ejecutó el golpe y que se legitimó en el poder en las elecciones del 2009, lejos de recuperar la institucionalidad, aceleró y profundizó su cooptación con el propósito de volver legal lo ilegal y mantenerse en el poder.

El resultado es una especie de juego de suma cero donde lo que ha ganado el grupo de poder para avanzar en su proyecto político y económico, lo ha perdido el Estado y la sociedad hondureña. Lo cual fue evidenciado en las recientes elecciones y posterior crisis política, con la consecuente pérdida de credibilidad y legitimidad de las instituciones ante buena parte de la ciudadanía.

De esa expresión abstracta de control de instituciones, frente a una sociedad que muestra una limitada identificación y sentido de pertenencia de lo Público, ahora se experimenta su expresión más dramática, la que se ejerce sobre los cuerpos y la vida de las personas que disienten, protestan y que deciden hacerlo a través de otros canales, distintos a los institucionales en los que no confían.

Desde hace casi dos décadas, a unos cuantos años de iniciada la democracia electoral hondureña, algunas investigaciones⁹ daban cuenta de que por su desempeño económico y social, el país se encontraba al borde de una zona de riesgo (que facilita la explosión de tensiones políticas acumuladas). Una de las razones que se suponía mantenía el precario equilibrio, era la fortaleza del sistema bipartidista, que sin importar su

⁹ PNUD: Política y desarrollo en Honduras, 2006-2009. Los escenarios posibles, Diego Archad y Luis Eduardo Gonzales (edit.), Tegucigalpa, 2006.



pésimo desempeño mantenía lealtades sólidas. Así, la élite política se ha mantenido hasta ahora en una zona de confort a costa del deterioro de las condiciones de vida para el resto de la población. El Golpe de Estado del 2009, aceleró el desgaste del bipartidismo y la actual crisis ha profundizado ese desgaste. Al punto que podríamos estar ante el surgimiento de una nueva cultura política, sobre todo entre la población más joven, quienes han sido los más afectados por el fracaso del modelo económico y por la corrupción.

El control arbitrario de los poderes del Estado, medios de comunicación, iglesias, fuerzas armadas, gremios y algunas organizaciones de sociedad civil que a cambio de prebendas legitiman la ilegalidad, ha polarizado aún más a la sociedad hondureña y ha tornado más compleja la actual crisis política. No obstante, la centralidad de poder, la discrecionalidad y la secretividad que concentra el actual presidente, no ha sido suficiente para imponer el relato oficial y los intereses particulares de su grupo. El papel de medios alternativos y redes sociales, ha sido clave para exponer y denunciar la arbitrariedad, el fraude, las violaciones a derechos humanos y también para facilitar la convocatoria a las protestas.

Igual que con el golpe de Estado del 2009, la actual crisis ha evidenciado, entre otras cosas, que hasta las democracias de fachada o malas democracias ya descritas, no las impugna la población excluida, sino las élites políticas, económicas y sociales que constituyen un sujeto político reacio a cualquier cambio. Se trata del grupo que históricamente se ha apropiado de la riqueza nacional a costa del empobrecimiento de la población y que cuando perciben que sus privilegios podrían estar en riesgo, cierran filas para impedirlo, incluso con golpes de Estado como el del 2009 o fraudes como el actual. Así es imposible avanzar ni siquiera hacia democracias de fachada o electorales.

El desafío de rescatar el Estado hondureño y de repensar la política como condición de posibilidad para democratizar el país, depende fundamentalmente de elevar los niveles de conciencia política, de organización y articulación de las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, pobladores y de

las diversas resistencias que actualmente rechazan el fraude electoral y apuestan a la refundación del país.

Recomendaciones

- 1.** Una lectura de las crisis políticas recientes, muestra, entre otras cosas que la democratización de Honduras no vendrá desde arriba, desde las élites políticas privilegiadas. Si se apuesta a la democratización, es necesario fortalecer las organizaciones ciudadanas, para que asuman de manera efectiva el desafío de rescatar la colapsada institucionalidad hondureña e impulsen los urgentes cambios para la democratización del país.
- 2.** Esa tarea es compleja y de largo alcance y no la podrá hacer solo la sociedad civil, requiere también fortalecer actores institucionales como los partidos políticos de cara a una reforma electoral amplia e incluyente que retome las propuestas ciudadanas formuladas desde hace algún tiempo y las nuevas surgidas a raíz de la actual crisis.
- 3.** Apoyar procesos formación política y construcción de ciudadanía, sobre todo con población juvenil, con enfoque de género y bajo principios que promuevan conductas y dinámicas colectivas democráticas.
- 4.** Dado el nivel de dependencia del Estado hondureño con respecto a la cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral, es recomendable fortalecer mecanismos de veeduría ciudadana a nivel interno y también ejercer control a nivel internacional. No se justifica la cooperación o financiamiento para fortalecer la captura de la institucionalidad pública, como tampoco se justifica el respaldo diplomático a un gobierno que abiertamente violenta derechos humanos.
- 5.** Presionar al Estado hondureño para avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos contenidos en diversos convenios internacionales de los que es signatario.



6. Apoyar el trabajo de la Misión Internacional de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Puesto que es improbable que un efectivo combate a la corrupción y la impunidad en Honduras se haga desde la institucionalidad del Estado hondureño capturada por los mismos grupos implicados en dicha corrupción.

7. Urge la construcción de nuevas narrativas para la democracia, el desarrollo y los mismos derechos humanos, banalizados desde los espacios de poder para sostener las nuevas dictaduras “electorales” que parecen ser la tendencia en la región.

8. Vistos los niveles de complicidad de los grandes medios corporativos con el poder establecido, independientemente de sus niveles de ilegalidad e ilegitimidad, es altamente recomendable fortalecer la comunicación alternativa, la producción y divulgación de contenidos favorables a la democratización de la comunicación y de la participación ciudadana.



Autora

Ana Ortega

Investigadora hondureña. Consultora en temas de género, juventudes, migración y economía feminista. Es graduada en Economía por la Universidad Nacional de Honduras, Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Santiago de Chile; Magíster en Migraciones, Conflicto y Cohesión Social en la Sociedad Global y; doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad Jesuita de Deusto, Bilbao.

© 2018 Friedrich Ebert Stiftung FES (Fundación Friedrich Ebert)

Dirección: Edificio Torre San Carlos, 8avo piso
Colonia San Carlos, Tegucigalpa

Email: honduras@fesamericacentral.org

www.fesamericacentral.org

Apartado Postal: 1744, Tegucigalpa, Honduras

FES Honduras

La Fundación Friedrich Ebert inició actividades en Honduras en el año de 1982. En el transcurso de éstos años han variado algunos instrumentos de trabajo, pero siempre se ha mantenido vigente el objetivo principal: el fortalecimiento de la democracia participativa y equitativa junto a la promoción del desarrollo sustentable con justicia social.

Nuestros fuertes son el asesoramiento político y la apertura de espacios de diálogo e intercambio político entre nuestras contrapartes nacionales, centroamericanas y de América Latina.